

# SESIONES DE PRORROGA

## 2001

# ORDEN DEL DIA N° 7

### COMISION DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

**Impreso el día 19 de febrero de 2002**

Término del artículo 113: 28 de febrero de 2002

**SUMARIO:** Presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal del año 2002. Aprobación. (52-JGM-2001.)

#### Dictamen de comisión

*Honorable Cámara:*

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha tomado en consideración el mensaje 3 del 5 de febrero de 2002 y proyecto de ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional para el ejercicio 2002; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja la sanción del siguiente

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

#### TITULO I

#### Disposiciones generales

#### CAPÍTULO I

*Del presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional*

Artículo 1º – Fíjense en la suma de cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos setenta y un mil novecientos treinta y cuatro pesos (\$ 42.844.471.934) los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la administración nacional para el ejercicio de 2002, con destino a las finalidades que se indican a continuación, y analíticamente en las planillas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 anexas al presente artículo.

FINALIDAD	GASTOS CORRIENTES	GASTOS DE CAPITAL	TOTAL
Administración Gubernamental	3.949.231.485	133.863.962	4.083.095.447
Servicios de Defensa y Seguridad	3.345.323.615	36.531.860	3.381.855.475
Servicios Sociales	28.661.141.670	1.641.996.830	30.303.138.500
Servicios Económicos	1.139.572.149	916.150.363	2.055.722.512
Deuda Pública	5.994.160.000	--	5.994.160.000
<b>Sub-Total</b>	<b>43.089.428.919</b>	<b>2.728.543.015</b>	<b>45.817.971.934</b>
Economía en base a la Programación de la Ejecución Financiera			2.973.500.000
<b>TOTAL NETO:</b>			<b>42.844.471.934</b>

La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía e Infraestructura, dará cumplimiento efectivo

a la “Economía” incluida en el cuadro precedente mediante la programación de la ejecución financiera.

Art. 2° – Estímase en la suma de treinta y nueve mil ochocientos noventa y cinco millones trescientos treinta y nueve mil veintinueve pesos (\$ 39.895.339.021) el cálculo de recursos de la administración nacional destinado a atender los gastos fijados por el artículo 1° de la presente ley de acuerdo con el resumen que se indica a continuación, y el detalle que figura en la planilla 8 anexa al presente artículo.

Recursos corrientes	39.528.972.659
Recursos de capital	366.366.362
<b>Total:</b>	<b>39.895.339.021</b>

Art. 3° – Fíjase en la suma de diez mil seiscientos cuarenta y cuatro millones trescientos veinticinco mil setecientos cuarenta y dos pesos (\$ 10.644.325.742) los importes correspondientes a los gastos figurativos para transacciones corrientes y de capital de la administración nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por Contribuciones Figurativas de la administración nacional en la misma suma, según el detalle que figura en las planillas 9 y 10, anexas al presente artículo.

Art. 4° – Como consecuencia de lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3°, el resultado financiero estimado en la suma de dos mil novecientos cuarenta y nueve millones ciento treinta y dos mil novecientos trece pesos (\$ 2.949.132.913) será atendido con las fuentes de financiamiento, deducidas de las aplicaciones financieras, indicadas a continuación y que se detallan en las planillas 11, 12 y 13 anexas al presente artículo:

#### *Resultado financiero*

<b>Fuentes de financiamiento</b>	<b>17.665.854.745</b>
– Disminución de la inversión financiera	448.538.000
– Endeudamiento público e incremento de otros pasivos	17.217.316.745
<b>Aplicaciones financieras</b>	<b>14.716.721.832</b>
– Inversión financiera	1.474.310.332
– Amortización de deuda y disminución de otros pasivos	13.242.411.500

Fíjase en la suma de quinientos quince millones ochocientos setenta y un mil setecientos pesos (\$ 515.871.700) el importe correspondiente a Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras de la administración nacional quedando en consecuencia establecido el Financiamiento por Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras de la administración nacional en la misma suma.

## **CAPÍTULO II**

### *De las operaciones de crédito público*

Art. 5° – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la ley 24.156, a los entes que se mencionan en la planilla anexa al presente

artículo, a realizar operaciones de crédito público por los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la referida planilla. Los importes indicados en la planilla corresponden a valores efectivos de colocación.

El Organismo Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera realizará las operaciones de crédito público correspondientes a la administración central.

El Ministerio de Economía e Infraestructura podrá efectuar modificaciones a las características detalladas en la mencionada planilla a los efectos de adecuarlas a las condiciones imperantes en los mercados y/o para mejorar el perfil de la deuda pública.

Art. 6° – El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía e Infraestructura, iniciará las gestiones para reestructurar la deuda pública en los términos del artículo 65 de la ley 24.156, a fin de adecuar los servicios de la misma a las posibilidades de pago del gobierno nacional. El Ministerio de Economía e Infraestructura informará al Honorable Congreso de la Nación el avance de las tratativas y de los acuerdos a los que se arribe.

Durante el tiempo que demande llegar a un acuerdo, el Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Economía e Infraestructura, podrá diferir total o parcialmente los pagos de los servicios de la deuda pública a efectos de atender las funciones básicas del Estado nacional.

Art. 7° – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5° y en el artículo 8° de la presente ley, autorízase al Organismo Responsable de la Coordinación de los sistemas de administración financiera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 60 y 82 de la ley 24.156, a colocar letras del Tesoro, a plazos de hasta trescientos sesenta y cinco (365) días, para mantener el valor nominal en circulación al 31 de diciembre de 2001. De acuerdo con las necesidades de financiamiento del Estado nacional, la colocación autorizada en el presente artículo podrá ser disminuida a los efectos de incrementar el monto autorizado en el artículo 5° de la presente ley.

Art. 8° – Fíjase en un mil cuatrocientos setenta y seis millones de pesos (\$ 1.476.000.000) el importe máximo de colocación de bonos de consolidación y de bonos de consolidación de deudas previsionales, en todas sus series, para el pago de las obligaciones contempladas en el artículo 2°, inciso f), de la ley 25.152. Las colocaciones serán efectuadas en el orden cronológico de ingreso a la Oficina Nacional de Crédito Público de la Subsecretaría de Financiamiento dependiente de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía e Infraestructura de los formularios de requerimiento de pago que cumplan con los requisitos que determine la reglamentación.

Las obligaciones comprendidas en el presente artículo y las alcanzadas en el decreto 1.318 del 6 de noviembre de 1998, serán atendidas mientras dure el proceso de renegociación referido en el artículo 6° de la presente ley, mediante la entrega de bonos de consolidación y bonos de consolidación de deudas previsionales IV serie.

Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional elevará, a consideración del Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley referido al proceso de reestructuración de deudas y créditos del sistema bancario, autorizando el endeudamiento derivado de dichos procesos y las medidas que fueren menester adoptar con el objeto de no alterar el resultado a que alude el artículo 4º de la presente ley.

Art. 10. – Dase por cancelada la opción de los acreedores a recibir bonos de consolidación en dólares estadounidenses y bonos de consolidación de deudas previsionales en dólares estadounidenses, cualquiera sea la serie de que se trate.

Las obligaciones que originalmente hubiesen sido pactadas en dólares estadounidenses y los formularios de requerimiento de pago ingresados a la Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía e Infraestructura que no hubiesen sido cancelados a la fecha de promulgación de la presente ley, serán convertidas a moneda nacional en las condiciones que determine la reglamentación.

Art. 11. – Fíjense en la suma de dos mil quinientos millones de pesos (\$ 2.500.000.000) y en la suma de quinientos millones de pesos (\$ 500.000.000) los montos máximos de autorización a la Tesorería General de la Nación y a la Administración Nacional de la Seguridad Social, respectivamente, para hacer uso, transitoriamente, del crédito a corto plazo a que se refieren los artículos 82 y 83 de la ley 24.156.

Art. 12. – Facúltase al Ministerio de Economía e Infraestructura a ofrecer bonos de consolidación, dentro de los límites establecidos en el artículo 8º, a aquellos tenedores reconocidos de deuda elegible para el Plan Financiero República Argentina 1992 que no hayan suscrito acuerdos de deuda en los términos del decreto 204 del 8 de febrero de 1995 y que acepten el canje de sus acreencias, hasta un monto máximo de cincuenta millones de pesos (\$ 50.000.000).

Art. 13. – Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía e Infraestructura a otorgar avales del Tesoro nacional por las operaciones de crédito público de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al presente artículo y por los montos máximos determinados en la misma.

Dispónese asimismo la caducidad, a partir de la fecha de promulgación de la presente ley, de las autorizaciones para otorgar avales del Tesoro nacional incluidas en leyes específicas y que no hayan sido ejercidas hasta dicha fecha. Las nuevas autorizaciones caducarán al año de la sanción de las normas que la faculden.

### CAPÍTULO III

#### *De la distribución, ampliación, modificaciones y plantas de personal*

Art. 14. – El jefe de Gabinete de Ministros distribuirá los créditos de la presente ley a nivel de las partidas limitativas previstas en los clasificadores

con excepción de las correspondientes a transferencias las cuales se desagregarán a su máximo nivel, y en las aperturas programáticas o categorías equivalentes que estime pertinentes.

Art. 15. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros para introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley y a establecer su distribución en la medida en que las mismas sean financiadas con incremento de fuentes de financiamiento originadas en préstamos de organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte, con la condición de que su monto se compense con la disminución de otros créditos presupuestarios y sin alterar el resultado a que alude el artículo 4º de la presente ley.

Art. 16. – El jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios de la administración central y de los organismos descentralizados, y su correspondiente distribución, financiados con incremento de los recursos con afectación específica, recursos propios o donaciones que perciban durante el ejercicio. Las medidas que se dicten en uso de esta facultad deberán destinar el treinta y cinco por ciento (35 %) al Tesoro nacional. Exceptúase de dicha contribución a los recursos con afectación específica a las provincias, a las donaciones y al producido de la venta de bienes y/o servicios.

Art. 17. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por la presente ley, con sujeción al artículo 37 de la ley 24.156, procurando que en las mismas se contemplen las compensaciones a la Jurisdicción 35- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto originadas en el costo adicional derivado de las transferencias al exterior por las variaciones en el tipo de cambio, pudiendo disponer delegaciones a la autorización conferida por el presente artículo.

Asimismo podrá, dentro de la facultad conferida en el párrafo anterior, afectar gastos de capital y aplicaciones financieras hasta un monto de sesenta millones de pesos (\$ 60.000.000) durante el transcurso del ejercicio para incrementar gastos corrientes.

Art. 18. – No se podrán aprobar incrementos en los cargos y horas de cátedra que excedan los totales determinados en las planillas anexas al presente artículo. Exceptúase de dicha limitación a las compensaciones de cargos derivadas de las reformas a la Ley de Ministerios y/o a las estructuras organizativas de las jurisdicciones y entidades de la administración nacional dispuestas o que se dispongan, y a los cargos correspondientes a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo nacional.

Asimismo quedan exceptuados los cargos correspondientes a las funciones ejecutivas previstos en el decreto 993 del 27 de mayo de 1991, y a las reestructuraciones de cargos originadas en reclamos dictaminados favorablemente y los regímenes que de-

terminen incorporaciones de agentes que completen cursos de capacitación específicos correspondientes a las fuerzas armadas, de seguridad, del servicio exterior de la Nación, del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, de la Carrera del Investigador Científico-Tecnológico y de los institutos tecnológicos del área nuclear.

Las excepciones previstas en el presente artículo serán aprobadas por decisión del jefe de Gabinete de Ministros.

Art. 19. – Salvo decisión fundada del jefe de Gabinete de Ministros, las jurisdicciones y entidades de la administración nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de la presente ley, ni los que se produzcan con posterioridad. Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente los cargos vacantes financiados correspondientes a las autoridades superiores de la administración pública nacional y la cobertura de cargos de funcionarios del Cuerpo Permanente Activo del Servicio Exterior de la Nación, así como del personal de las fuerzas armadas y de seguridad incluido el Servicio Penitenciario Federal, originada por los reemplazos de aquellos agentes que han pasado a situación de retiro.

Art. 20. – Los créditos del inciso 1. Gastos en personal vigentes de las jurisdicciones y entidades de la administración nacional deberán atender en su totalidad los crecimientos de cualquier naturaleza que se produzcan por aplicación de las normas escalafonarias vigentes para cada una de las jurisdicciones y entidades.

El mayor costo que pueda originarse como consecuencia de cambios de estructuras organizativas y de modificaciones orientadas al ordenamiento general de la normativa laboral vigente será atendido con afectación a los créditos asignados en la presente ley, para lo cual el jefe de Gabinete de Ministros queda facultado para disponer las modificaciones presupuestarias correspondientes.

Art. 21. – Los pasantes de la administración pública nacional podrán continuar sus pasantías hasta un año posterior a la fecha que aprueben la última asignatura de sus carreras. Los pasantes graduados podrán cumplir jornadas de hasta ocho (8) horas, con una actividad semanal de cinco (5) días, con la asignación estímulo prevista en el artículo 5º del decreto 428 de fecha 29 de mayo de 2000 y en el anexo I del decreto 93 de fecha 19 de enero de 1995.

Art. 22. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias como consecuencia de la finalización de la construcción y toma de posesión del edificio destinado a la formación de los suboficiales de la Armada Argentina en la Base Naval de Puerto Belgrano, de acuerdo con la autorización conferida por el artículo 40 de la ley 25.237, y consecuentemente de los compromisos derivados de la resolución conjunta de la Secretaría de Finanzas Nº 61 y 166 de la Secretaría de Hacienda del 16 de mayo de 2000 y sus modificatorias, así como de la

implementación del proyecto Fijación del Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina ejecutado por el Ministerio de Relaciones exteriores, Comercio Internacional y Culto en cumplimiento de la ley 24.815.

Art. 23. – El monto autorizado para la Jurisdicción 90 - Servicio de la deuda pública incluye la suma de dieciocho millones de pesos (\$ 18.000.000) destinada a la atención de las deudas referidas en los incisos b) y c) del artículo 7º de la ley 23.982.

#### CAPÍTULO IV

##### *De las normas sobre gastos*

Art. 24. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 24.156, la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio financiero del año 2002, de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al presente artículo.

Art. 25. – Fíjase como crédito total para las universidades nacionales la suma de un mil setecientos noventa y siete millones setecientos cuarenta mil pesos (\$ 1.797.740.000), de conformidad con el detalle de la planilla anexa al presente artículo.

Las asignaciones de recursos por programas, cuyos montos se detallan en la referida planilla, serán distribuidos por el Ministerio de Educación, facultándolo asimismo a establecer los conceptos que componen los mismos y los requisitos destinados a mejorar la calidad, la eficiencia y la equidad de las asignaciones de recursos.

Art. 26. – Las universidades nacionales cumplirán anualmente con lo establecido por el artículo 46 de la ley 24.156 y deberán encuadrarse dentro de las disposiciones del decreto 1.023 del 13 de agosto de 2001 y su reglamentación. Asimismo remitirán a la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación la plataforma mínima de información salarial presupuestaria del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU), instituida por el decreto 645 del 4 de mayo de 1995. Autorízase a dicha secretaría a requerir a la Tesorería General de la Nación dependiente de la Secretaría de Hacienda, la suspensión de la cancelación de órdenes de pago a favor de las universidades nacionales que no hayan dado cumplimiento al envío de la información referida precedentemente.

Las universidades nacionales presentarán en forma semestral a la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología las metas alcanzadas a nivel de cada unidad independiente (rectorados, facultades o departamentos, hospitales, centros, etcétera) según el detalle de aquellas que constan en el presupuesto y plan de acción presentado en su oportunidad. Dicha Secretaría pondrá a disposición de la Auditoría General de la Nación, cuando ésta lo requiera, la documentación recibida.

Art. 27. – Déjase sin efecto la integración correspondiente del Fondo Anticíclico Fiscal creado por el artículo 9º de la ley 25.152, con excepción de la afec-

tación de los recursos provenientes de las concesiones en los términos que establece el referido artículo.

Art. 28. – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 10 de la ley 25.237, sustituido por el artículo 15 de la ley 25.401, incorporado a la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (texto ordenado 1999), por el siguiente texto:

El jefe de Gabinete de Ministros autorizará el inicio de las negociaciones definitivas de la operación previo dictamen del Ministerio de Economía e Infraestructura sobre la viabilidad de la operación, considerando especialmente los siguientes conceptos:

- a) Factibilidad económico-técnica del proyecto de acuerdo con las normas de la Ley de Inversiones Públicas;
- b) Incidencia de la operación teniendo en cuenta la sujeción a las reglas fiscales que dispone la ley 25.152, la restricción impuesta por la ley 25.453 y el conjunto de operaciones de crédito que se encuentran en proceso de ejecución;
- c) Valorización y viabilidad financiera de las condiciones del préstamo que afecten los recursos del Tesoro Nacional y otros recursos internos;
- d) Planta de personal de la unidad ejecutora y su impacto presupuestario, en caso de que sea necesaria su creación.

Art. 29. – La Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas actuarán como organismos descentralizados del Ministerio del Interior. Déjanse sin efecto los artículos 10 y 11 del decreto 1.045 del 16 de agosto de 2001.

Art. 30. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a incorporar en el presupuesto de la Administración Nacional los créditos y el correspondiente financiamiento para la aplicación de la ley 24.813, incluyendo los importes del impuesto al valor agregado y los derechos aduaneros del equipamiento a importar.

Autorízase, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 24.156, a realizar las contrataciones derivadas del Plan Nacional de Radarización hasta un monto de inversión, incluidos impuestos y derechos de doscientos veinte millones de pesos (\$ 220.000.000), afectando el treinta y dos con cinco por ciento (32,5 %) al ejercicio fiscal del año 2002, el cuarenta y siete con cinco por ciento (47,5 %) al ejercicio del año 2003 y el veinte por ciento (20 %) restante al ejercicio del año 2004. Asimismo, se podrá ejecutar el plan total, parcial o alternativamente, mediante el Sistema de Promoción de la Participación Privada de Proyectos de Infraestructura. De optarse por esta modalidad, autorízase al jefe de Gabinete de Ministros, sobre la base del monto total de la inversión, a establecer el flujo plurianual de contraprestaciones, el cual podrá incluir en forma adicional, el costo financiero, el costo de manteni-

miento y operación de la inversión, así como la incorporación definitiva y la modernización del equipamiento existente.

Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a fijar los valores o, en su caso, escalas e importe a aplicar de las tasas aeroportuarias cuya percepción se encuentra a cargo de la Fuerza Aérea Argentina a las que hace referencia el decreto 500 de fecha 2 de junio de 1997. En ningún caso los incrementos o disminuciones a que pudiere dar lugar, podrán ser superiores al veinte por ciento (20 %) de las vigentes. Los incrementos a que hubiere lugar por aplicación de lo aquí dispuesto serán asignados al financiamiento del Plan Nacional de Radarización.

Facúltase, asimismo, al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para compensar los mayores gastos que se autorizan por el presente artículo.

Art. 31. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a cancelar durante el año 2002 con recursos del Tesoro nacional, la amortización de deudas financieras del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, hasta un monto máximo de ciento cincuenta y nueve mil millones (\$ 159.000.000).

## CAPÍTULO V

### *De las normas sobre recursos*

Art. 32. – Dispónese el ingreso como contribución al Tesoro nacional de la suma de quinientos veintiocho millones trescientos setenta y dos mil trescientos pesos (\$ 528.372.300), de acuerdo con la distribución indicada a continuación, y con destino a la atención de gastos de la administración central y para la cancelación de deudas por aportes al Tesoro nacional de ejercicios anteriores:

Jurisdicciones de la administración

central	154.588.300
Organismos descentralizados	113.784.000
Fondos fiduciarios	200.000.000
Bancos oficiales	60.000.000

La distribución de los créditos presupuestarios a que alude el artículo 14 de la presente ley detallará los organismos involucrados con indicación de los importes correspondientes y el destino de los mismos (gastos o amortización de deudas).

El jefe de Gabinete de Ministros establecerá el cronograma de pagos procurando no interferir en el normal funcionamiento de aquéllas.

Art. 33. – Las entidades integrantes del sector público nacional comprendidas en los incisos b), c) y d) del artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias deberán efectuar la disminución proporcional de sus gastos primarios en virtud de lo establecido por el artículo 34 de la ley 24.156 sustituido por el artículo 10 de la ley 25.453, de acuerdo con el coeficiente de reducción que mensualmente establezca la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía e Infraestructura. Los ahorros que se generen serán transferidos al Tesoro nacional den-

tro de los primeros quince (15) días del mes siguiente al correspondiente a la disminución. Las empresas y sociedades del Estado que financian sus gastos de funcionamiento con aportes del Tesoro nacional no efectuarán dicha transferencia, reduciéndose en ese monto dicha contribución.

Art. 34. – Fíjase en la suma de tres millones seiscientos setenta y siete mil pesos (\$ 3.677.000) el monto de la tasa regulatoria según lo establecido en el párrafo primero del artículo 26 de la ley 24.804; ley nacional de la actividad nuclear.

Art. 35. – Sustitúyese el artículo 44 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (texto ordenado 1999), por el siguiente texto:

Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía e Infraestructura a colocar las disponibilidades del Tesoro nacional y las correspondientes a las instituciones de la seguridad social que se pongan a disposición de la Tesorería General de la Nación, en cuentas remuneradas del país o del exterior, o en la adquisición de títulos públicos o valores locales o internacionales de reconocida solvencia, con excepción de los recursos previstos por las leyes 23.660, 23.661 y 19.032 y sus modificatorias. La Secretaría de Hacienda dictará las normas aclaratorias y complementarias del presente artículo.

#### CAPÍTULO VI

##### *De los cupos fiscales*

Art. 36. – Fíjase el cupo anual a que se refiere el artículo 3º de la ley 22.317 en la suma de doce millones de pesos (\$ 12.000.000). Déjase establecido que, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, el monto del crédito fiscal a que se refiere la mencionada ley será administrado por la Secretaría de la Pequeña y la Mediana Empresa y Desarrollo Regional dependiente del Ministerio de la Producción.

Art. 37. – Fíjase el cupo anual a que se refiere el artículo 9º, inciso b) de la ley 23.877 en la suma de veinte millones de pesos (\$ 20.000.000).

Art. 38. – Dentro de los créditos asignados a la Jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro se ha incluido la suma de ciento cuarenta y ocho millones quinientos mil pesos (\$ 148.500.000) para atender los déficit de las cajas de jubilaciones de aquellas provincias que hayan suscripto convenios a tal efecto en el marco del artículo 12 del compromiso federal, en la medida en que las citadas jurisdicciones den cumplimiento a lo pactado en los respectivos convenios.

#### CAPÍTULO VII

##### *De las sentencias judiciales*

Art. 39. – Sustitúyese el artículo 68 de la ley 11.672; complementaria permanente de presupuesto (texto ordenado, 1999), por el siguiente texto:

Los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado nacional o alguno de los entes

y organismos que integran el sector público nacional al pago de una suma de dinero o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resolviera en el pago de una suma de dinero, serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en las distintas jurisdicciones y entidades del presupuesto general de la administración nacional, sin perjuicio del mantenimiento del régimen establecido por las leyes 23.982 y 25.344.

En el caso que el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo nacional deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente, a cuyo fin las jurisdicciones y entidades demandadas deberán tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del día 31 de julio del año correspondiente al envío del proyecto, debiendo remitir a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía e Infraestructura con anterioridad al 31 de agosto del mismo año el detalle de las sentencias firmes a incluir en el citado proyecto, de acuerdo con los lineamientos que anualmente la citada secretaría establezca para la elaboración del proyecto de presupuesto de la administración nacional.

Los recursos asignados anualmente por el Honorable Congreso de la Nación se afectarán al cumplimiento de las condenas por cada servicio administrativo financiero y siguiendo un estricto orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial y hasta su agotamiento, atendándose el remanente con los recursos que se asignen en el ejercicio fiscal siguiente.

Art. 40. – Establécese como límite máximo la suma de setenta y cuatro millones setecientos cuarenta mil pesos (\$ 74.740.000) destinado al pago de sentencias judiciales por la parte que corresponda abonar en efectivo, correspondiente al principal, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones del régimen previsional público y la suma de diecisiete millones doscientos mil pesos (\$ 17.200.000) para la atención de las deudas previsionales consolidadas conforme a las leyes 23.982, 24.130 y 25.344.

La cancelación de deudas a que hace referencia el párrafo anterior está sujeta a la disponibilidad de los respectivos recursos, que para el presente período fiscal se afectarán observando estrictamente los siguientes órdenes de prelación:

- a) *Cancelación de deuda consolidada:* los recursos se distribuirán entre los acreedores atendiendo en primer lugar a los de mayor edad y, dentro de este ordenamiento, dando prioridad a los que tengan menores acreencias a cobrar;

b) *Cancelación de sentencias judiciales*: los recursos se destinarán en primer término al cumplimiento de las sentencias notificadas en períodos fiscales anteriores y aún pendientes de pago y luego a las sentencias notificadas en el año 2001. En el primer caso se dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad y, en el segundo, se respetará estrictamente el orden cronológico de la notificación de las sentencias definitivas, conforme el orden de prioridades que con una periodicidad cuatrimestral, sobre la base de las sentencias registradas en cada momento, establezca la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones en los créditos presupuestarios que resulten necesarias en el caso de que por efecto de la aplicación de la ley 25.344 se modifique el instrumento de pago de las sentencias judiciales previsionales previstas en el presente artículo.

Asimismo se incluye en el inciso 7 - Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos, del Organismo 850 - Administración Nacional de la Seguridad Social, la suma de seis millones doscientos cincuenta y cinco mil pesos (\$ 6.255.000), para dar cumplimiento a las acordadas 34/91, 56/91, 21/97 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el decreto 2.474 de fecha 30 de diciembre de 1985.

Art. 41. – A los efectos de la cancelación de las sentencias judiciales firmes originadas en reajustes salariales del personal en actividad de las fuerzas armadas y de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, en el marco de la ley 25.344, dase por prorrogada la fecha de consolidación de dichas obligaciones al 31 de diciembre de 2001.

Art. 42. – Dentro del límite establecido por el artículo 8° de la presente ley, establécese un monto de cuatrocientos noventa y dos millones quinientos mil pesos (\$ 492.500.000), destinado a la cancelación de deudas previsionales consolidadas, de acuerdo con lo dispuesto por las leyes 23.982, 24.130 y 25.344, así como el cumplimiento de sentencias judiciales que ordenen retroactivos y reajustes por la parte que corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de deuda pública correspondiente a retirados y pensionados de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad incluido el Servicio Penitenciario Federal, de acuerdo con el siguiente detalle:

- a) Instituto de ayuda financiera para pago de retiros y pensiones militares: \$ 327.500.000;
- b) Caja de retiros, jubilaciones y pensiones de la Policía Federal Argentina \$ 100.000.000;
- c) Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina: \$ 65.000.000.

Facúltase al Ministerio de Economía e Infraestructura a realizar modificaciones dentro de la suma total a que se refiere el párrafo anterior.

Art. 43. – La cancelación de las deudas a que hace referencia el artículo anterior se realizará observando estrictamente el orden de prelación que a continuación se detalla:

- a) Sentencias notificadas en períodos fiscales anteriores y aún pendientes de pago;
- b) Sentencias notificadas en el año 2001.

En el primer caso se dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad y, en el segundo se respetará estrictamente el orden cronológico de la notificación de las sentencias definitivas, conforme el orden de prioridades que con una periodicidad cuatrimestral, sobre las bases de las sentencias registradas en cada momento, establezcan los respectivos organismos descentralizados y servicios administrativos a que hace referencia el primer párrafo de este artículo.

## CAPÍTULO VIII

### *De las jubilaciones y pensiones*

Art. 44. – Establécese, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, que la participación del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, referida en los artículos 18 y 19 de la ley 22.919, no podrá ser inferior al treinta y nueve por ciento (39 %) del costo de los haberes remunerativos de retiro, indemnizatorios y de pensión de los beneficiarios.

Art. 45. – El otorgamiento de nuevas pensiones no contributivas quedará supeditado a una baja equivalente en los beneficios otorgados dentro de los créditos asignados por la presente ley para la atención de dichos beneficios de manera de no afectar el crédito presupuestario anual con tal finalidad.

Art. 46. – Dase por prorrogada al 31 de diciembre de 2001 la fecha de consolidación de las obligaciones previsionales establecidas en el artículo 13 de la ley 25.344.

Art. 47. – Dentro del límite establecido por el artículo 8° de la presente ley, establécese la suma de cuatrocientos siete millones quinientos mil pesos (\$ 407.500.000) destinado a la cancelación de deudas previsionales consolidadas, de acuerdo con lo dispuesto por las leyes 23.982, 24.130 y 25.344, así como el cumplimiento de sentencias judiciales que ordenen retroactivos y reajustes del régimen previsional público, por la parte que corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de deuda pública. Dicho crédito se afectará observando los criterios de prelación dispuestos por el artículo 41 de la presente ley.

## CAPÍTULO IX

### *De los fondos fiduciarios*

Art. 48. – Sustitúyese el inciso a) del artículo 5° de la ley 25.152 por el siguiente texto:

- a) Toda creación de organismo descentralizado, empresa pública de cualquier naturaleza

y fondo fiduciario integrado total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado nacional requerirá del dictado de una ley.

Art. 49. – Apruébanse, de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al presente artículo, los flujos financieros y el uso de fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente por bienes y/o fondos del Estado nacional para el presente ejercicio, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 2º, inciso a) de la ley 25.152.

Art. 50. – Sin perjuicio de las normas establecidas en materia de crédito público, las modificaciones a realizar al presupuesto aprobado de los fondos fiduciarios del Estado nacional durante el período de ejecución que implique la alteración con signo negativo del resultado económico o financiero o el incremento del endeudamiento bruto autorizado, deben ser aprobadas por resolución del Ministerio de Economía e Infraestructura con intervención de la Secretaría de Hacienda, previo dictamen de la Oficina Nacional de Presupuesto.

Las modificaciones no comprendidas en lo establecido en el párrafo anterior deberán ser aprobadas por resolución de la autoridad responsable del fondo fiduciario, con la obligación de remitir a la Oficina Nacional de Presupuesto copia autenticada de dicho acto administrativo, adjuntando los antecedentes que fundamentan la medida. La resolución quedará firme si pasados quince (15) días corridos de la recepción de la documentación por parte de la Oficina Nacional de Presupuesto ésta no opusiere reparos formales y de razonabilidad a la modificación.

Al finalizar el ejercicio financiero los fondos fiduciarios procederán a informar a la Contaduría General de la Nación el cierre de las cuentas de sus presupuestos y toda otra información que ésta determine, dentro de la cual se deberá incluir un informe sintético de los resultados obtenidos en la gestión anual, los cuales serán analizados por la Oficina Nacional de Presupuesto y cuyas conclusiones deberán incorporarse al informe requerido en el tercer párrafo del artículo 43 de la ley 24.156.

Las máximas autoridades de los entes comprendidos en los incisos b), c) y d) del artículo 8º de la ley 24.156 y sus modificaciones, deberán remitir a la Oficina Nacional de Presupuesto, antes del día 15 del mes posterior al que se informa, la ejecución económica y financiera de sus presupuestos, de acuerdo con los lineamientos establecidos a tal fin por la Secretaría de Hacienda.

Art. 51. – Déjase establecido que los fondos fiduciarios integrados mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional no podrán tener estructura de personal permanente y temporario a su cargo. El personal de los fondos fiduciarios, sus consejos de administración y de los fideicomisos de asistencia deberán integrar las plantas de personal de las jurisdicciones y/o entidades de las cuales dependen los citados fondos fiduciarios. Dispónese que los fondos fiduciarios podrán financiar, a

través de transferencias, los gastos en personal de las jurisdicciones y entidades involucradas. Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las modificaciones en las plantas de personal que se originen como consecuencia de lo dispuesto precedentemente.

Art. 52. – Dase por capitalizado al Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial por la suma establecida en el artículo 6º del decreto 1.004 de fecha 9 de agosto de 2001, modificado por el decreto 1.603 de fecha 5 de diciembre de 2001.

A tal efecto, autorízase como monto adicional al establecido en el artículo 5º de la presente ley la emisión de un instrumento de deuda con condiciones financieras previstas en el artículo 6º de la Segunda Addenda al Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal y con vencimiento el día 31 de enero de 2011.

Art. 53. – Prorrógase el plazo de duración del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial creado por decreto 286 de fecha 27 de febrero de 1995, hasta el día 27 de febrero de 2025, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º inciso c) de la ley 24.441.

## CAPÍTULO X

### *De la ejecución presupuestaria en el marco de la ley de emergencia*

Art. 54. – El Poder Ejecutivo Nacional y las jurisdicciones y entidades de la administración nacional no podrán proponer o dictar normas ni aprobar convenios que originen gastos que superen el límite fijado por el artículo 1º de la presente ley sin el cumplimiento previo de la identificación del gasto que se dará de baja o el recurso con el cual se atenderá.

Asimismo no podrán, bajo ningún concepto y cualquiera fuese su fuente de financiamiento, asumir obligaciones de cualquier naturaleza que superen los créditos presupuestarios otorgados ni comprometer o devengar gastos que superen las cuotas asignadas por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía e Infraestructura para cada una de esas etapas de la ejecución presupuestaria.

La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía e Infraestructura, a través de la Contaduría General de la Nación, procederá a modificar los procedimientos contable-informáticos que permitan identificar de inmediato el incumplimiento de lo dispuesto precedentemente y asegurar la calidad de los registros.

Art. 55. – La Contaduría General de la Nación, en su carácter de órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental, deberá informar, dentro del plazo de cinco (5) días, a los órganos de control interno y externo a que se refiere la ley 24.156, los incumplimientos que se verifiquen a lo dispuesto en el artículo anterior de la presente ley. La Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación procederán a su vez a comunicar de inmediato a la Procuración General de la Nación para



que promueva las acciones legales por violación al artículo 248 del Código Penal.

Art. 56. – Sustitúyense los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 5º de la ley 24.629 por el siguiente texto:

El funcionario que autorice o concrete actos o contratos que no hayan dado cumplimiento a las normas de la ley 24.156, sus reglamentaciones y modificaciones, será personalmente responsable, con sus bienes patrimoniales, si de aquéllos resultare la obligación de pagar sumas de dinero. El Poder Ejecutivo nacional establecerá, por vía reglamentaria, los procedimientos necesarios para efectivizar dicha responsabilidad o para imponer sanciones pecuniarias.

Art. 57. – Establécese que una vez remitidos los fondos de coparticipación federal determinados en la Segunda Addenda al Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal ratificada por el decreto 1.584 del 5 de diciembre de 2001, los pagos con fondos del Tesoro nacional originados en la ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional, deberán sujetarse a un orden de prelación que priorice los siguientes conceptos de gastos: gastos en personal y transferencias a entes públicos destinadas al pago de remuneraciones y de becas; prestaciones de carácter previsional; garantía y coparticipación, servicios básicos, incluidos combustibles destinados a las fuerzas armadas y de seguridad; alimentos para personas y productos farmacéuticos y medicinales; transferencias para atender emergencias alimentarias, sanitarias, de empleo y desempleo y servicio de la deuda pública y resto de gastos.

El Ministerio de Economía e Infraestructura a través de la Secretaría de Hacienda procederá, dentro de las pautas precedentes, a detallar las partidas por objeto del gasto involucradas en la prelación dispuesta, la cual también será de aplicación a los pagos que efectúen las jurisdicciones y entidades con fuentes de financiamiento 12-Recursos Propios, 13-Recursos con Afectación Específica, 21-Transferencias Externas y 22-Crédito Externo.

Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía e Infraestructura a disponer cambios en el orden de prelación cuando circunstancias excepcionales así lo justifiquen, informando al Honorable Congreso de la Nación del uso de dicha facultad.

Art. 58. – El Poder Ejecutivo nacional deberá elevar a consideración del Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley referido a la reestructuración del Estado nacional del cual surjan una reducción en los gastos de funcionamiento del mismo y una mejora en su eficiencia.

## CAPÍTULO XI

### *Otras disposiciones*

Art. 59. – Las facultades otorgadas por la presente ley al jefe de Gabinete de Ministros podrán ser

asumidas por el Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de responsable político de la administración general del país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del artículo 99 de la Constitución Nacional.

Asimismo, déjase establecido que el jefe de Gabinete de Ministros podrá delegar las facultades conferidas por la presente ley, en el marco de las competencias asignadas por la Ley de Ministerios.

Art. 60. – Establécese que la cancelación de deudas del Tesoro nacional a favor de provincias por la suma de trescientos veintitrés millones quinientos veinte mil pesos (\$ 323.520.000), de acuerdo con el detalle de la planilla anexa al presente artículo, y el monto de trescientos millones de pesos (\$ 300.000.000) a favor del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, se efectuará en seis (6) cuotas anuales, iguales y consecutivas a partir del ejercicio de 2003.

Las provincias beneficiarias a que se refiere la planilla anexa podrán ejercer el derecho de cesión de las sumas a percibir.

Art. 61. – Establécese que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados queda comprendido dentro de los alcances del título II, capítulo III y de los títulos III, VI y VII de la ley 24.156.

Los gastos corrientes y gastos de capital a devengar por parte del citado instituto no podrán exceder el producido de los recursos propios afectados al mismo.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados deberá, en lo pertinente, encuadrarse dentro del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (decreto 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001). Asimismo deberá entregar a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía e Infraestructura la plataforma mínima de información salarial presupuestaria del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU), instituida por el decreto 645 de fecha 4 de mayo de 1995.

El instituto no podrá incrementar la planta de personal permanente, transitoria y contratada ocupada al 31 de diciembre de 2000. Asimismo no podrá aplicar recursos a la creación de fondos fiduciarios no autorizados por ley.

El instituto deberá presentar en forma mensual a las comisiones de Salud y Presupuesto y Hacienda del Poder Legislativo y a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía e Infraestructura la evolución de los estados contables, la ejecución presupuestaria (base devengado y base caja) y en forma trimestral el estado de deudas y créditos. Dicha información deberá detallar el cumplimiento del plan de acción, la ejecución de los gastos operativos y aquellos destinados a la atención de prestaciones médicas y sociales.

Art. 62. – Consolidanse en el Estado nacional, en los términos y con los alcances de la ley 23.982 y del capítulo V de la ley 25.344 y normas reglamentarias y complementarias y dentro del monto a que alude el artículo 8º de la presente ley, las obligacio-

nes de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, actualmente en liquidación, derivadas de su actividad bancaria y financiera, comprendidas en la ley 21.526, y aseguradora, comprendida en la ley 17.418, ya sea como demandada directa o como citada en garantía, como aquellas obligaciones que resulten de su actividad institucional, en su carácter de empleadora o como contratante de servicios o adquirente de cualquier tipo de bienes.

Las ejecuciones emanadas de pronunciamientos judiciales firmes por coberturas otorgadas por diferentes riesgos por la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, actualmente en liquidación, no podrán hacerse extensivas, hasta el límite de las coberturas otorgadas, contra los asegurados y terceros alcanzados por tales coberturas, los que a tales efectos quedan liberados de la responsabilidad solidaria frente al damnificado dispuesta por la ley 17.418.

Los jueces deberán arbitrar lo conducente al levantamiento de las medidas cautelares dispuestas judicialmente contra los asegurados y terceros alcanzados por las coberturas otorgadas por la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, actualmente en liquidación, en razón de su actividad aseguradora, con fundamento en la consolidación en el Estado nacional que se dispone por la presente ley.

Facúltase al Ministerio de Economía e Infraestructura a establecer las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, así como a abrir un registro de las obligaciones cuyo origen y consecuencia correspondan a indemnizaciones de trabajadores con incapacidades laborales reales absolutas y permanentes a quienes la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (en liquidación) les adeude sumas dinerarias, con sentencia judicial firme. Dichos casos podrán ser exceptuados de la consolidación prevista en el presente artículo y abonados conforme al orden cronológico de las fechas de sentencia en la medida de la disponibilidad de créditos presupuestarios que por reasignación de otras partidas se pueda obtener.

Art. 63. – Consolidanse en el Estado nacional, en los términos y con los alcances de las leyes 23.982 y 25.344, y normas reglamentarias y complementarias y dentro del monto a que alude el artículo 8º de la presente ley, los derechos y obligaciones de causa o título anterior al 31 de diciembre de 2000, correspondientes al Instituto Nacional de Reaseguros Sociedad del Estado (en liquidación), que consistan en el pago de sumas de dinero o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero, y que correspondan a los siguientes casos:

- a) Las obligaciones derivadas de su operatoria, con excepción de las que se encuentren alcanzadas por los convenios suscritos o a suscribir con las entidades aseguradoras de la plaza aseguradora local, en el marco del decreto 1.061/99, modificado por el decreto 1.220/00;

- b) Las obligaciones derivadas de su actividad institucional como empleadora, contratante de servicios o adquirente de bienes;
- c) Las obligaciones con entidades aseguradoras de la plaza local, que se encuentren en estado de liquidación forzosa (artículo 9º del decreto 1.061/99, modificado por decreto 1.220/00);
- d) Los convenios suscritos o a suscribir en el marco del artículo 6º del decreto 1.061/99 modificado por decreto 1.220/00;

Art. 64. – El Ministerio de Economía e Infraestructura tomará a su cargo la extinción de los derechos y obligaciones del Instituto Nacional de Reaseguros Sociedad del Estado (en liquidación) y de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (en liquidación), derivados de sus actividades como reaseguradoras activas o pasivas con entidades del exterior, para lo cual se faculta al citado ministerio a ofrecer, dentro del monto a que alude el artículo 8º de la presente ley, instrumentos de deuda pública en pago de las obligaciones emergentes.

Art. 65. – Consolidanse en el Estado nacional, en los términos y con los alcances de la ley 23.982 y del capítulo V de la ley 25.344, normas reglamentarias y complementarias y dentro del monto a que alude el artículo 8º de la presente ley, las obligaciones del ex Banco Hipotecario Nacional, derivadas de su actividad bancaria y financiera comprendidas en la ley 21.526, e institucionales, en su carácter de empleador o como contratante de servicios o adquirente de cualquier tipo de bienes, asumidas por el Estado nacional conforme a lo dispuesto por el artículo 40 del decreto 924 de fecha 11 de septiembre de 1997 y sus modificatorios.

Facúltase al Ministerio de Economía e Infraestructura a establecer las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.

Art. 66. – Dase por operada la extinción del derecho de la ex Obras Sanitarias de la Nación, actualmente en cabeza del “Patrimonio en liquidación -Banco Nacional de Desarrollo”, a perseguir el cobro de los créditos a favor de esa ex empresa correspondientes a deudas en gestión administrativa de ex usuarios no fiscales por servicios sanitarios prestados con anterioridad a su concesionamiento acaecido el 1º de mayo de 1993, en aquellos casos en que ha transcurrido el plazo legal de prescripción para su percepción.

Decláranse remitidos de pleno derecho los créditos de esa ex empresa por deudas de ex usuarios no fiscales por servicios prestados con anterioridad a su concesionamiento, cuando se trate de sumas menores a un mil pesos (\$ 1.000) y se encuentren tanto en gestión administrativa como judicial de cobro, con excepción de aquellas últimas respecto de las que hubiere recaído sentencia favorable a la ex empresa.

Dispénsase al Ministerio de Economía e Infraestructura del inicio de investigaciones sumariales para determinar eventuales responsabilidades procesales en que hubieren incurrido los agentes judiciales a cargo de los pleitos tendientes al recupero de las obligaciones cuya remisión se dispone precedentemente, salvo dolo o culpa grave atribuible a los mismos y con excepción de aquellos casos en que se constate que el agente hubiera percibido alguna renta y omitido su ingreso a la ex Obras Sanitarias de la Nación. Dicha dispensa se producirá con sujeción al cumplimiento por parte de los agentes judiciales de las condiciones que a tales efectos establezca el Ministerio de Economía e Infraestructura y siempre que la misma no signifique asunción por parte del Estado nacional de costo adicional alguno por la atención de los juicios.

Art. 67. – Encomiéndase al Ministerio de Economía e Infraestructura, a partir de la fecha en que se produzca la disolución definitiva del Fondo Nacional de la Marina Mercante (en disolución), el ejercicio de las prerrogativas, derechos y obligaciones establecidos en la ley 19.870, modificada por su similar 23.103, inherentes al recupero de sumas adeudadas al Estado nacional, por los préstamos y subsidios acordados conforme a dicho marco legal, pudiendo delegar en los organismos de su competencia el tratamiento e instrumentación de las acciones conducentes a tales efectos.

Art. 68. – Facúltase a la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía e Infraestructura para ofrecer en pago de obligaciones de causa o título posterior al 1° de enero de 2000, excluidas de los alcances establecidos por el capítulo V de la ley 25.344 y su reglamentación, cuyos deudores sean entes, órganos y sociedades del Estado nacional declarados en estado de liquidación y transferidos al ámbito de competencia del Ministerio de Economía e Infraestructura, bonos de consolidación de deudas emitidos en función de lo establecido por el capítulo V de la ley 25.344 y dentro del monto a que alude el artículo 8° de la presente ley.

Art. 69. – Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía e Infraestructura para que a través de la Tesorería General de la Nación otorgue anticipos reintegrables de fondos a la Administración Nacional de la Seguridad Social para cubrir deficiencias estacionales de caja, los que serán cancelados dentro del mes en que se otorguen y se computarán dentro de los límites para hacer uso transitorio del crédito a corto plazo que autoriza anualmente la ley de presupuesto para dicha administración. El uso de esta autorización se medirá como la diferencia entre los adelantos brutos de fondos menos las devoluciones efectuadas. La Secretaría de Hacienda dictará las normas complementarias y aclaratorias del presente artículo.

Art. 70. – Autorízase a la Secretaría de Hacienda a instrumentar sistemas de retención sobre las transferencias que por inciso 5 el Tesoro nacional

efectúe a entidades públicas del gobierno nacional, con el objeto de destinarlas a la cancelación de las obligaciones que tales entidades devenguen por contribuciones patronales a la seguridad social comprendidas en la contribución unificada a la seguridad social (CUSS).

Art. 71. – Sustitúyese el artículo 8° de la ley 24.156 de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, por el siguiente texto:

Artículo 8°: Las disposiciones de esta ley serán de aplicación en todo el sector público nacional, el que a tal efecto está integrado por:

- a) Administración nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social;
- b) Empresas y sociedades del Estado que abarcan a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias;
- c) Entes públicos excluidos expresamente de la administración nacional, que abarcan a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones;
- d) Fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.

Art. 72. – Modifícase la denominación del capítulo III del título II de la ley 24.156 de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, que se denominará: “Del régimen presupuestario de empresas públicas, fondos fiduciarios y entes públicos no comprendidos en administración nacional”. Déjase establecido que la mención en los artículos del capítulo III de la ley mencionada a las empresas y sociedades del Estado deberá sustituirse por la expresión “empresas públicas y entes públicos no comprendidos en administración nacional”.

Art. 73. – Asígnase al Proyecto 06 - CERIDE Obras Complementarias del Programa 25 - Ejecución de Obras de Arquitectura de la Jurisdicción 50 - Ministerio de Economía e Infraestructura el importe adicional de tres millones de pesos (\$ 3.000.000), el cual será compensado con una disminución de igual

monto en los créditos de otros proyectos de la misma jurisdicción, facultando al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las modificaciones presupuestarias pertinentes, pudiendo para este caso alterar los montos fijados en el artículo 1° de la presente ley para las Finalidades.

Art. 74. – Establécese que los créditos incluidos en el artículo 1° de la presente ley destinados a transferencias a provincias para la atención de planes sociales y de empleo comprenden a las asignaciones presupuestarias previstas en el artículo 16 del Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal ratificado por la ley 25.400.

Art. 75. – Las personas físicas o jurídicas sujetas a las actividades de fiscalización y control de normas técnicas y de seguridad en la comercialización de gas licuado de petróleo, de calidad de combustibles y de transporte por ducto de hidrocarburos líquidos, a cargo de la Secretaría de Energía, abonarán las tasas de fiscalización y control que determine el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de la citada secretaría.

El producido de las tasas a que se refiere el párrafo anterior constituirá un recurso con afectaciones específicas administrado por la Secretaría de Energía, facultando al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las adecuaciones que permitan su incorporación al Presupuesto de la Administración Nacional.

Art. 76. – Créase el Fondo Fiduciario para Fiscalización y Control de Combustibles con el objeto de financiar: a) las compensaciones tarifarias para la zona sur del país y del departamento Malargüe, de la provincia de Mendoza, que las distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural y gas licuado de petróleo de uso domiciliario deberán percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales, y b) la venta para uso domiciliario de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo en las provincias ubicadas en la región patagónica y del departamento Malargüe, de la provincia de Mendoza.

El fondo creado en el párrafo anterior, cuyo monto total no podrá exceder la suma de cien millones de pesos (\$ 100.000.000), se constituirá con un recargo de hasta cuatro milésimos de peso (\$ 0,004) por cada metro cúbico (m<sup>3</sup>) de 9.300 kilocalorías, que se aplicará a la totalidad de los metros cúbicos que se consuman por redes o ductos en el territorio nacional cualquiera fuera el uso o utilización final del mismo, y tendrá vigencia para las entregas posteriores a la publicación de la presente ley. Los productores de gas actuarán como agentes de percepción en las entregas de gas natural a cualquiera de los sujetos de la industria.

La totalidad de los importes percibidos en razón del recargo establecido por el presente artículo y no ingresados por los agentes de percepción dentro del plazo que fije la reglamentación, devengará a partir del vencimiento del mismo los intereses, actualizaciones y multas establecidas por la ley 11.683 y sus modificatorias (texto ordenado 1998) y regi-

rán a su respecto los procedimientos y recursos previstos en dicha ley.

El Ministerio de Economía e Infraestructura determinará el importe del recargo referido en el presente artículo y reglamentará la constitución y funcionamiento del fondo fiduciario creado.

Los actuales niveles tarifarios destinados al cobro directo de los usuarios residenciales podrán, en coordinación con las jurisdicciones beneficiarias, ser afectados en función de principios básicos de equidad, uso racional de la energía y/o a los efectos de mantener el monto total de los recursos asignados.

Para acceder a los fondos determinados en el presente artículo no podrán gravarse con impuestos provinciales ni tasas municipales los consumos, la utilización de espacios públicos ni los ingresos percibidos a través de este subsidio por los prestadores de servicio de distribución de gas natural que brinden el servicio objeto del subsidio.

El presente régimen se mantendrá en vigencia por un plazo de diez (10) años.

Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a aprobar el flujo financiero y uso del fondo fiduciario creado por el presente artículo.

Art. 77. – Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 1° de la ley 25.552 a las deudas originadas en préstamos provenientes de organismos multilaterales de crédito.

Art. 78. – Establécese que las obligaciones que pudieran exceder el monto previsto en la presente ley para la atención de la operatoria determinada en el artículo 4°, inciso b), de la Segunda Addenda al Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal ratificada por el decreto 1.584 del 5 de diciembre de 2001, serán atendidas con las reasignaciones presupuestarias que fueran necesarias. Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes para cumplir con dichas obligaciones.

Art. 79. – Establécese que la construcción de viviendas económicas realizadas y a realizar por la empresa del Estado Construcción de Viviendas para la Armada (Coviara S.E.) y por otros organismos encargados de construcción de viviendas del resto de las fuerzas armadas y de seguridad financiadas con fondos suministrados por el Tesoro nacional, y por los recursos establecidos en el decreto 441 de fecha 23 de abril de 1996, se halla comprendida en las disposiciones de la ley 21.581.

Art. 80. – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 24.241 por el siguiente texto:

Artículo 9°: A los fines del cálculo de los aportes y contribuciones correspondientes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, las remuneraciones no podrán ser inferiores al importe equivalente a tres (3) veces el valor del módulo previsional (MOPRE), definido en el artículo 21.

Si un trabajador percibe simultáneamente más de una remuneración o renta como traba-

jador en relación de dependencia o autónomo, cada remuneración o renta será computada separadamente a los efectos del límite inferior establecido en el párrafo anterior. En función de las características particulares de determinadas actividades en relación de dependencia, la reglamentación podrá establecer excepciones a lo dispuesto en el presente párrafo.

Como consecuencia de lo dispuesto en el presente artículo sustitúyese el artículo 3° del decreto 814 del 20 de junio de 2001 por el siguiente:

Artículo 3°: A estos fines, se entenderá por remuneración la definida en el artículo 6° de la ley 24.241, con una base imponible mínima de tres (3) MOPRE.

Art. 81. – Establécese que la mayor recaudación que se verifique por la aplicación del artículo anterior deberá ser destinada exclusivamente por la Administración Nacional de Seguridad Social a incrementar paulatinamente el monto a que se refiere el artículo 1° del decreto 926 de fecha 20 de julio de 2001.

A tal efecto el órgano recaudador arbitrará los procedimientos necesarios para determinar el monto del incremento de la recaudación.

Art. 82. – Restitúyese la alícuota establecida en el inciso a) del artículo 16 de la ley 23.660 en concepto de contribución patronal al Sistema de Obras Sociales.

Incrementéntanse asimismo en un (1) punto porcentual las alícuotas de contribución patronal establecidas en el artículo 2° del decreto 814 del 20 de junio de 2001, modificado por la ley 25.453, destinada al financiamiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

Art. 83. – Los tributos nacionales ingresados en Lecop serán distribuidos de acuerdo a la proporción que les corresponde a la Nación, a las provincias, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Seguridad Social, en concepto de coparticipación federal de impuestos y demás regímenes especiales vigentes, de acuerdo a la recaudación que de dichos títulos ingrese.

Art. 84. – Las jurisdicciones provinciales y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán, respecto del ejercicio financiero 2001, no imputar a los fines específicos los fondos coparticipables asignados por leyes especiales, hasta un setenta y cinco (75 %) del valor de los mismos, los cuales no se computarán a los fines de la obligación a que se refiere el inciso g) del artículo 9° de la ley 23.548.

Art. 85. – Los lineamientos y condiciones que sean convenidos en el marco de la reestructuración de la deuda pública nacional se aplicarán a las gestiones para la reprogramación de la deuda pública provincial.

Art. 86. – Las pensiones gratificables otorgadas y prorrogadas por las leyes 24.307, 24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064 y 25.237, de presupuesto para la administración nacional, y 25.500, mantienen su vigencia, siempre que el monto de los beneficios no exceda el

importe mensual de tres con setenta y cinco módulos previsionales (3,75 MOPRE), y serán incompatibles con cualquier ingreso y/o beneficio previsional y con los requisitos exigidos por los incisos b) y c) del tercer párrafo del artículo 55 de la ley 25.401.

Establécese que el monto de las pensiones otorgadas en virtud de las leyes 24.191, 24.307, 24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064 y 25.237 no podrá superar el importe mensual de tres coma setenta y cinco módulos previsionales (3,75 MOPRE), siendo compatible con cualquier otro ingreso que no supere la suma de uno coma ochenta y ocho módulos previsionales (1,88 MOPRE) e incompatible con otra pensión gratificable.

Art. 87. – Prorróganse por diez (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones gratificables que fueran otorgadas por el artículo 37 de la ley 24.061. Dicha prórroga se dispondrá de conformidad a las prescripciones de los incisos b) y c) del artículo 55 de la ley 25.401. El monto de los beneficios a prorrogar no podrá exceder el importe mensual de tres con setenta y cinco módulos previsionales (3,75 MOPRE) y será incompatible con cualquier otro ingreso y/o beneficio previsional.

Art. 88. – Establécese, dentro de los créditos aprobados por la presente ley, la suma de nueve millones cuatrocientos mil pesos (\$ 9.400.000), destinada al pago de las pensiones gratificables acordadas de conformidad con el artículo 55 de la ley 25.401, pendientes de pago, siendo de aplicación expresa para dichos beneficios lo dispuesto en el último párrafo del mencionado artículo.

Art. 89. – Dentro de los créditos asignados al Ministerio del Interior se dispone un subsidio por la suma de cien mil pesos (\$ 100.000) a favor de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

Art. 90. – Establécese que dentro de los créditos aprobados por el artículo 1° de la presente ley, la Dirección Nacional de Vialidad deberá incluir las sumas necesarias para iniciar las obras de construcción de cobertizos en la ruta internacional a Chile en el tramo comprendido entre la localidad de Punta de Vacas y Las Cuevas de la ruta nacional 7 y la repavimentación de quince kilómetros (15 km) de la ruta nacional 7 del paso fronterizo a Chile.

Art. 91. – Dentro de los créditos asignados al Ministerio de Salud dispónese un aporte no reintegrable a favor de la Fundación de la Hemofilia por la suma de un millón de pesos (\$ 1.000.000).

Como contrapartida del subsidio otorgado la Fundación de Hemofilia entregará a la Tesorería General de la Nación los Bonos de Consolidación tercera serie que tiene en existencia originados en cobro de deudas del PAMI.

Art. 92. – El importe del Fondo Nacional de Incentivo Docente correspondiente al segundo semestre del año 2001 podrá ser atendido durante el presente ejercicio dentro del total de créditos aprobados por la presente ley, facultándose al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las adecuaciones de partidas presupuestarias que estime convenientes.

tes a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el presente artículo.

Art. 93. – Dentro de los créditos asignados al Ministerio de Desarrollo Social dispónese un aporte no reintegrable a favor de la Fundación Felices los Niños por la suma de un millón ochocientos mil pesos (\$ 1.800.000).

Art. 94. – Reasígnase dentro del total asignado a la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Presidencia de la Nación la suma de cien mil pesos, (\$ 100.000) para financiar la edición de las obras completas de Domingo Faustino Sarmiento dispuesta por la ley 25.159.

Art. 95. – Establécese que los créditos destinados al Poder Judicial de la Nación comprenden el necesario para la puesta en funcionamiento del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional con asiento en la localidad de 3 de Febrero, provincia Buenos Aires, creado por ley 25.012.

## CAPÍTULO XII

### De la ley complementaria permanente

Art. 96. – Incorpóranse a la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (texto ordenado en 1999), los artículos 21, 26, 29, 35, 51, 52, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 83 y 86 de la presente ley.

## TÍTULO II

### Presupuesto de gastos y recursos de la administración central

Art. 97. – Detállanse en las planillas resumen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, anexas al presente título, los importes determinados en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la presente ley.

## TÍTULO III

### Presupuesto de gastos y recursos de organismos descentralizados e instituciones de seguridad social

Art. 98. – Detállanse en las planillas resumen 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y 9A anexas al presente título los importes determinados en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la presente ley.

Art. 99. – Detállanse en las planillas resumen 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B y 9B anexas al presente título los importes determinados en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la presente ley.

Art. 100. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
Sala de la comisión, 14 de febrero de 2002.

*Jorge Matzkin. – Elsa Correa de Pavón. – Rafael González. – Julio Gutiérrez. – Sergio Acevedo. – Daniel Basile. – Graciela Camaño. – Luis Cigogna. – Juan Correa. – Alberto Coto. – Jorge Escobar. – Jorge Obeid. – Marta Palou. – Juan Schiaretti. – Carlos Snopek. – Miguel A. Toma. – Juan M. Urtubey.*

En disidencia parcial:

*Guillermo Cantini. – Julio Conca. – Guillermo Corfield. – Miguel Giubergia. – Beatriz Nofal. – Aldo Ostropolsky. – Horacio Pernasetti.*

En disidencia total:

*Daniel Carbonetto. – José A. Vitar.*

Nota: Planillas anexas al articulado, se publican las modificadas e incorporadas al dictamen.

## CAPÍTULO II

### Planilla Anexa al Art. 13

## OTORGAMIENTO DE AVALES

### POR PARTE DEL TESORO NACIONAL

ENTE AVALADO	MONTO MAXIMO AUTORIZADO (en pesos)	TIPO DE DEUDA
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.	300.000.000	Externa – Letras de Mediano Plazo – Financiamiento de la Inversión productiva y del comercio exterior.
Provincia de Entre Ríos	25.000.000	Exterior Multilateral – Equipamiento Hospitalario y Maquinaria Vial
Provincia de Córdoba	174.000.000	Exterior Bancario – Construcción de Unidades Carcelarias

CAPITULO IV  
Planilla Anexa al Art. 25UNIVERSIDADES NACIONALES  
PRESUPUESTO 2002  
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

-En Pesos-

Universidades Nacionales	Salud	Educación y Cultura	Ciencia y Técnica	Total
Buenos Aires	39.484.366	251.311.529	8.576.533	299.372.428
Catamarca		20.843.410	861.395	21.704.805
Centro		25.850.464	1.351.200	27.201.664
Comahue	245.000	39.745.995	1.325.024	41.316.019
Córdoba	11.328.420	109.048.448	3.690.551	124.067.419
Cuyo	490.000	74.836.847	1.770.017	77.096.864
Entre Ríos		22.871.394	604.881	23.476.275
Formosa		10.181.002	183.025	10.364.027
Gral. San Martín		13.479.598	106.399	13.585.997
Gral. Sarmiento		10.356.559	0	10.356.559
Jujuy		16.093.175	485.600	16.578.775
La Matanza		26.621.949	352.505	26.974.454
La Pampa		19.194.974	671.232	19.866.206
La Patagonia S.J. Bosco		32.526.632	488.601	33.015.233
La Plata	490.000	96.456.808	5.390.137	102.336.945
La Rioja		13.520.745	306.230	13.826.975
Litoral		42.397.817	1.993.773	44.391.590
Lomas de Zamora		30.782.044	279.294	31.061.338
Luján		21.273.393	634.973	21.908.366
Mar del Plata		41.237.716	2.101.482	43.339.198
Misiones		29.358.909	768.531	30.127.440
Nordeste	490.000	48.784.409	758.314	50.032.723
Quilmes		16.136.612	183.025	16.319.637
Río Cuarto		34.201.025	1.984.259	36.185.284
Rosario	490.000	87.254.192	2.621.388	90.365.580
Salta		29.024.607	1.306.918	30.331.525
San Juan		61.087.201	2.098.412	63.185.613
San Luis		35.695.327	1.657.528	37.352.855
Santiago del Estero		18.593.008	549.555	19.142.563
Sur		35.780.135	1.733.826	37.513.961
Tecnológica		104.132.470	1.071.096	105.203.566
Tucumán	490.000	95.012.106	3.074.463	98.576.569
La Patagonia Austral		14.362.545	230.279	14.592.824
Lanus		6.272.136	0	6.272.136
Tres de Febrero		5.710.734	0	5.710.734
Villa María		6.337.237	0	6.337.237
Inst.Univ.Nac.del Arte		13.064.241	0	13.064.241
Fundación Miguel Lillo			3.643.640	3.643.640
<b>Subtotal:</b>	<b>53.507.786</b>	<b>1.557.437.393</b>	<b>52.854.086</b>	<b>1.663.799.265</b>
<b>Crédito a Distribuir</b>				0
Incentivos a los Docentes Investigadores			65.000.000	65.000.000
Reforma y Reestructuración Laboral Pers.No Docente		15.000.000		15.000.000
PROCAP		5.000.000		5.000.000
CIN		300.000		300.000
Asignación de Recursos	1.092.000	31.785.103	1.078.000	33.955.103
Prog. de Reforma de la Educ.Sup.(FOMEC-SIU)		14.685.632		14.685.632
<b>Subtotal:</b>	<b>1.092.000</b>	<b>66.770.735</b>	<b>66.078.000</b>	<b>133.940.735</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>54.599.786</b>	<b>1.624.208.128</b>	<b>118.932.086</b>	<b>1.797.740.000</b>

CONCEPTO	DESARROLLO PROVINCIAL	ASIST. A ENT. REGIONAL Y DE FOMAS Y DE	ED. INF. REGIONAL	DE CAPITAL SOCIAL	PROMOCION CIEN. Y TECNOL.	SECCION A DESTINO A ESTUDIANTES UNIV.	REMARQUE DE INFRAEST.	PAZEL TRANSPORTE FERREO	CONCEPTO	FINANCIAL 9/2021	DE INFRAEST. HERRIA	FOGAFIVE	DEFORMA DE LA ECONOMIA CIVIL	SEC. DE INDUSTRIA-BICI	TOTAL
IV.- INGRESOS CORRIENTES	58.776.861,5	33.311.102,0	35.828.000,0	4.265.000,0	21.153.000,0	7.423.000,0	10.000.000,0	49.307.600,0	IV.- INGRESOS CORRIENTES	503.038.000,0	2.038.000,0	1.849.490,0	25.000.000,0	13.313.000,0	1.272.887.223,5
- Ingresos de la Propiedad	12.745.161,5	32.995.400,0	34.005.000,0	4.299.000,0	21.152.000,0	7.423.000,0	10.000.000,0	5.567.000,0	- Ingresos de la Propiedad	5.500.000,0	2.500.000,0	1.722.744,0	20.000.000,0	16.315.000,0	14.000.000,0
- Otras Ingresos Corrientes	12.000.000,0	6.106.102,0	1.823.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45.710.600,0	- Otras Ingresos Corrientes	0,0	246.000.000,0	616.494,0	0,0	0,0	90.845.895,0
IV.- GASTOS CORRIENTES	20.802.423,3	25.360.300,0	28.776.000,0	2.863.000,0	21.191.300,0	7.847.000,0	0,0	45.367.600,0	IV.- GASTOS CORRIENTES	317.724.000,0	138.620.000,0	2.258.900,0	2.500.000,0	3.037.300,0	89.738.748,3
- Gastos de Operación	16.445.000,0	8.600.000,0	2.776.000,0	2.393.000,0	0,0	0,0	0,0	45.367.600,0	- Gastos de Operación	0,0	2.336.000,0	1.055.940,0	400.000,0	3.037.300,0	84.726.891,0
- Gastos de Mantenimiento	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0	0,0	41.778.800,0	- Gastos de Mantenimiento	0,0	0,0	984.171,0	490.000,0	7.313.810,0	7.313.810,0
- Bienes y Servicios	15.222.000,0	258.800,0	1.540.000,0	500.000,0	13.170,0	0,0	0,0	41.778.800,0	- Bienes y Servicios	0,0	351.707,0	335.893,0	400.000,0	3.637.300,0	84.726.891,0
- Depreciación y Amortización	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Depreciación y Amortización	0,0	1.282.138,0	0,0	0,0	0,0	716.300,0
- Aporte por Variación de Patrimonio	192.241.823,3	18.779.300,0	22.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Aporte por Variación de Patrimonio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97.921.320,0
- Aportes de la Propiedad	12.745.161,5	18.779.300,0	22.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Aportes de la Propiedad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.424.153,3
- Ingresos Extraordinarios	122.000.000,0	18.779.300,0	22.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Ingresos Extraordinarios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92.644.633,3
- Avanzamiento de Títulos y Reservas	0,0	0,0	2.813.000,0	500.000,0	21.162.000,0	7.847.000,0	0,0	0,0	- Avanzamiento de Títulos y Reservas	317.724.000,0	138.620.000,0	0,0	2.500.000,0	30.000.000,0	551.288.000,0
- Transferencias Corrientes	0,0	0,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Transferencias Corrientes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80.000,0
- Otras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Otras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
III.- RESULTADO ECONOMICO (I+II)	98.854.438,2	12.851.800,0	6.420.000,0	1.338.000,0	0,0	[564.000,0]	10.000.000,0	3.330.000,0	III.- RESULTADO ECONOMICO (I+II)	216.315.000,0	103.990.000,0	603.597,0	17.100.000,0	(17.323.600,0)	438.370.181,2
IV.- INGRESOS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IV.- INGRESOS DE CAPITAL	50.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0
- Ingresos de la Propiedad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Ingresos de la Propiedad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0
- Transferencias del Estado Nacional	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Transferencias del Estado Nacional	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0
V.- GASTOS DE CAPITAL	14.000,0	0,0	95.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	V.- GASTOS DE CAPITAL	287.486.000,0	37.403.000,0	0,0	10.000.000,0	0,0	304.886.000,0
- Gastos de la Propiedad	14.000,0	0,0	95.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Gastos de la Propiedad	0,0	0,0	0,0	10.000.0		



**ATENCION OBLIGACIONES Y COMPROMISOS CONTRAIDOS CON GOBIERNOS PROVINCIALES  
Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES HASTA 2001  
EN MILLONES DE PESOS**

	Ley 25.235 Com. Federal Art. 12	Aptos no Reintegrables	Subsidio Gas Región Patagónica	Convenio Bilateral	FONAVI 1998	FONAVI Junio 2001	Salto Grande 1998-2001	TOTAL
BUENOS AIRES			3,0					3,0
CATAMARCA					3,7	0,6		4,4
CORDOBA						1,7		1,7
CORRIENTES						1,5	19,0	20,5
CHACO								0,0
CHUBUT			27,3		5,7	1,0		34,0
ENTRE RIOS					7,0	1,2	46,6	54,7
FORMOSA						1,2		1,2
JUJUY					5,4	0,9		6,3
LA PAMPA	1,6		14,0			0,6		16,2
LA RIOJA		21,0				0,6		21,6
MENDOZA								0,0
MISIONES						1,4	3,5	4,9
NEUQUEN			17,8			1,3		19,1
RIO NEGRO			21,7		8,0	1,4		31,1
SALTA						1,2		1,2
SAN JUAN					6,5	1,1		7,6
SAN LUIS					10,0	1,1		11,1
SANTA CRUZ		1,5	38,4			1,0		40,9
SANTA FE					10,1	1,7		11,8
SGO. DEL ESTERO				12,5	7,7	1,3		21,5
TUCUMAN						1,3		1,3
TIERRA DEL FUEGO			5,9			0,8		6,7
SUB-TOTAL	1,6	22,5	128,1	12,5	64,1	23,1	69,0	320,8
G.C.B.A.					2,3	0,4		2,7
TOTAL	1,6	22,5	128,1	12,5	66,4	23,5	69,0	323,5

## INFORME

### Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el mensaje 3 del 5 de febrero de 2002 conteniendo el proyecto de ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2002, de cuya evaluación surgen las siguientes consideraciones:

El proyecto ha sido elaborado con arreglo a las bases de la ley 25.561, por la que se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria sancionada por esta Cámara con fecha 6 de enero de 2002.

El contenido del proyecto revela el contexto de gravedad en el que se desenvuelve la situación económica nacional y refleja el esfuerzo por estructurar una política fiscal sustentable y compatible con el programa económico en curso de ejecución.

En lo que respecta al proceso de financiamiento y servicio de la deuda pública, el proyecto estipula un diferimiento en los pagos de la deuda a los fines de hacerlo congruente con las dispo-

nibilidades y posibilidades de acceso a las distintas fuentes de financiamiento, dentro del objetivo de restablecimiento progresivo del crédito público.

Las previsiones en materia de gasto reflejan el esfuerzo por reducir los niveles de gasto primario, pero procurando concentrar los mayores niveles de racionalización en los gastos administrativos y burocráticos ligados a la política y al funcionamiento del Estado.

Se han definido prioridades consistentes con la grave emergencia que padecemos, asignando un importante volumen de recursos al financiamiento de programas direccionados a la atención de la emergencia sanitaria, alimentaria y de empleo.

En este último caso, el proyecto contempla una partida de \$ 1.200 millones con destino a programas de empleo y a seguros para las hipótesis de desocupación.

Por su parte, en lo que respecta a los gastos en inversión real se ha buscado asegurar la continuidad de las obras en ejecución.

En lo concerniente a las relaciones financieras interjurisdiccionales el proyecto contempla el res-

peto por los compromisos institucionales suscriptos en el marco de los diferentes acuerdos de concertación federal.

Asimismo, a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, se articularán los instrumentos destinados a generar las bases para la reactivación económica sectorial y regional.

Merecen ser destacadas las reformas que se introducen al régimen de administración financiera del Estado, por cuanto se extiende el ámbito de aplicación de la ley 24.256 a los fondos fiduciarios y los entes públicos no estatales.

Del mismo modo se han acotado las potestades de reestructuración presupuestaria en cabeza del jefe de Gabinete de Ministros, ampliando las potestades congresionales, tanto en el diseño de la política presupuestaria como en el control de su ejecución.

Del examen realizado en el ámbito de la comisión y con el espíritu de sumar los mayores niveles de consenso en torno al proyecto, se han introducido reformas al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, siendo las más importantes las siguientes:

Se incluyó un nuevo artículo por el cual se dispone que el Poder Ejecutivo remitirá un proyecto de ley que contemple el proceso de reestructuración de deudas con el sistema financiero a raíz de las últimas reformas introducidas por la ley 25.561 y las normas dictadas en su consecuencia.

Se introdujeron modificaciones a la planilla anexa vinculada al otorgamiento de avales a fin de incorporar obras públicas en el ámbito provincial con financiamiento previamente garantizado.

Se limitaron las posibilidades de ampliación de créditos presupuestarios por incorporación de recursos propios, eliminando la referencia a los remanentes de ejercicios anteriores, a fin de evitar el incremento del déficit.

Se acotaron las atribuciones del jefe de Gabinete de Ministros, asegurando la plena vigencia de la Ley de Administración Financiera del Estado, básicamente en lo concerniente a las facultades de reestructuración presupuestaria.

Se facultó expresamente a efectuar modificaciones a los fines de propiciar recursos con destino a la implementación del proyecto de fijación del límite exterior de la plataforma continental argentina, de cuyos resultados se esperan significativos resultados estratégicos para la soberanía nacional y la posibilidad de explotar recursos.

Se modificó la planilla anexa vinculada con la asignación del aporte del Tesoro nacional con destino a las universidades nacionales, acogiendo los

consensos arribados en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional.

Se estableció la obligación de informar a la Auditoría General de la Nación, en lo vinculado al cumplimiento de ciertos requisitos presupuestarios por parte de las universidades nacionales.

Se eliminó el artículo 39, que disponía la suspensión de los beneficios de carácter promocional y que alcanzaba a la promoción industrial y no industrial, generando recursos genuinos para solventar la continuidad de dichos regímenes.

Se suprimió la declaración de emergencia administrativa y financiera por entender que dicho extremo estaba contemplado en la sanción de la ley 25.561.

Del mismo modo se suprimió toda delegación de facultades para la reestructuración del Estado, por considerar que es una atribución propia del Congreso, en cuyo ámbito debe debatirse un proyecto orgánico de reforma administrativa y del Estado.

Si bien se mantuvo la tasa de fiscalización para las estaciones de servicio, se suprimió la creación de un fondo fiduciario específico para administrar los recursos que se recauden por tal concepto.

En cuanto a las obligaciones asumidas por el gobierno federal en el marco del artículo 4° de la Segunda Addenda del Compromiso Federal, cuya cancelación el proyecto preveía para el ejercicio 2003, se autorizó a que dichos compromisos sean asumidos mediante reasignaciones presupuestarias en el ejercicio 2002.

Otra de las modificaciones receptadas en nuevo artículo, la constituye la previsión de \$ 323,5 millones para atender deudas de la Nación con las provincias y de \$ 300 millones a favor del PAMI.

Con destino al sistema de seguridad social se contemplan trascendentes reformas, entre las que merecen evidenciarse: la eliminación del tope en las remuneraciones para efectuar aportes y contribuciones; el incremento de un punto porcentual para los aportes patronales destinados a obras sociales y PAMI y la obligación de destinar la mayor recaudación al incremento de las prestaciones previsionales.

Con estas reformas y otras de menor relevancia que serán explicitadas por el miembro informante en ocasión de su debate en el plenario, esta comisión aconseja la aprobación del proyecto de ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional.

*Jorge R. Matzkin.*

## ANTECEDENTE

Trámite Parlamentario N° 220.